

Ecología y política



Cristina Narbona

Presidenta del PSOE.
Miembro de la Red Española de
Desarrollo Sostenible

El ecologismo, al igual que sucede con el feminismo, tiene un inmenso potencial transformador, especialmente atractivo para las generaciones más jóvenes, aquellas cuyo voto condicionará, cada vez más, la configuración de los gobiernos nacionales; y ojalá también, de las instituciones europeas. Para los socialistas –que hemos incorporado plenamente las reivindicaciones del feminismo –, la comprensión de las cuestiones ambientales como importantes desafíos éticos y sociales es todavía, aunque cada vez menos, una asignatura pendiente. Gobiernos y partidos mayoritarios no han prestado suficiente atención a la evolución de una crisis ecológica que amenaza con provocar un auténtico colapso civilizatorio.

Escribo estas líneas mientras en toda Europa dos potentes movimientos sociales –el feminismo y el ecologismo –, con la complicidad de partidos políticos de izquierdas y verdes, se configuran como los principales diques frente al avance de la ultraderecha. En ambos casos, se trata de movimientos –y de partidos– defensores de la justicia social, radicalmente democráticos y comprometidos con una globalización muy diferente de la actual.

En particular, los partidos verdes han conseguido ampliar su electorado durante 2018, con éxitos notables en muchos países, con un discurso claramente europeísta, en favor de sociedades abiertas y diversas, y con propuestas que pretenden abordar de forma conjunta los retos ambientales y los retos sociales.

No tengo la menor duda de que el feminismo y el ecologismo tienen un inmenso potencial transformador, especialmente atractivo para las generaciones más jóvenes, aquellas cuyo voto condicionará, cada vez

más, la configuración de los gobiernos nacionales; y ojalá también, de las instituciones europeas. Para los socialistas –que hemos incorporado plenamente las reivindicaciones del feminismo –, la comprensión de las cuestiones ambientales como importantes desafíos éticos y sociales es todavía, aunque cada vez menos, una asignatura pendiente.

La urgencia social de los desafíos ecológicos

A pesar de las crecientes advertencias de la comunidad científica –y de la denuncia sistemática por parte de las organizaciones ecologistas–, gobiernos y partidos mayoritarios no han prestado suficiente atención a la evolución de una crisis ecológica que amenaza con provocar un auténtico colapso civilizatorio.

Ha primado, sin duda, un enfoque de corto plazo; y también la confianza en las capacidades de la tecnología, así como la convicción de que el incremento del PIB –ese erróneo indicador del verdadero

progreso social–, podría verse amenazado por las políticas ambientales.

Pero los efectos del cambio climático ya son visibles en todos los rincones del mundo: desde el rápido deshielo de los polos y de los glaciares al incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos –sequías, inundaciones, huracanes... –, desde el desplazamiento hacia zonas templadas de enfermedades y plagas propias de zonas tropicales al calentamiento de los océanos y la consiguiente afección a los ecosistemas marinos.

Todo ello genera consecuencias sociales y económicas de enorme impacto: pérdidas humanas y materiales a causa de las “catástrofes naturales”, migraciones masivas ante impactos negativos en numerosos sectores productivos...

Los efectos del cambio climático, de la contaminación, de la pérdida de biodiversidad... sobre la salud, la seguridad y la actividad económica de amplios segmentos de

la población, muy en particular en los países más pobres, comportan amenazas para la estabilidad política, cuya gravedad han confirmado ya analistas prestigiosos. Pese a ello, subsisten muchos obstáculos que retrasan tanto la urgente transición ecológica de la economía como la adaptación ante procesos en gran medida ya irreversibles.

La ecología, por lo tanto, ha comenzado a escalar posiciones en la agenda política, excepto en aquellos países donde han triunfado líderes negacionistas, como lamentablemente es el caso de dos grandes potencias: Estados Unidos y Brasil.

La crisis ecológica comporta un incremento de las desigualdades y de la desconfianza de los ciudadanos ante la deficiente actuación de las instituciones públicas; la urgencia de enfrentarla tiene, por lo tanto, una evidente dimensión ética y política.

El papel político del ecologismo: desde el conservacionismo a los Partidos Verdes

El término "ecología" –la ciencia que estudia el *oikos*, la casa, el entorno... – fue utilizado por primera vez en 1866 por Ernest Haeckel, como disciplina que analiza la interrelación entre la actuación de los seres humanos con el medio ambiente.

Durante el siglo XIX, la protección de amplios espacios naturales, todavía vírgenes, movilizó a muchos ciudadanos en Estados Unidos que confluyeron en potentes organizaciones conservacionistas. Su objetivo estaba acotado a dicha protección, sin apenas cuestionamiento del incipiente modelo económico industrial y urbano que supondría una creciente amenaza para la preservación de la biodiversidad en todo el planeta.

Más tarde se establecieron normas destinadas a corregir la contaminación, en particular en Alemania y en el Reino Unido, dada la percepción de los riesgos que generaba para la salud pública.

La publicación en 1962 de *La primavera silenciosa*, de la bióloga norteamericana Rachel Carson, supuso el inicio de las reivindicaciones políticas desde la ecología. Carson denunció los gravísimos efectos de las sustancias tóxicas presentes en determinados fertilizantes y plaguicidas sobre la salud, así como la dura reacción de las empresas concernidas por esta denuncia. Solo desde la acción pública y la correspondiente regulación podía defenderse el interés general frente a los intereses particulares.

La crisis ecológica comporta un incremento de las desigualdades y de la desconfianza de los ciudadanos ante la deficiente actuación de las instituciones públicas; la urgencia de enfrentarla tiene, por lo tanto, una evidente dimensión ética y política.

Durante la década de los sesenta se intensificó la movilización de las organizaciones ecologistas, que confluyeron con otras organizaciones (pacifistas, feministas, defensoras de los derechos humanos, anarquistas...) en el estallido social del Mayo de 1968 en París.

Las cuestiones energéticas han estado muy presentes a lo largo de la historia del movimiento ecologista, como elemento crucial del modelo económico, muy dependiente de los combustibles fósiles y de la energía nuclear. Ambas fuentes de energía han sido objeto de denuncias contundentes a causa de su impacto ambiental y de los riesgos asociados.

En 1979 nació el Partido de los Verdes en Alemania, definido por una de sus fundadoras, Petra Kelly, como el "partido anti partido", que llegó al Bundestag en 1983 "sin hacerse ilusiones", con el propósito, entre otros, de exigir la máxima transparencia en materia ambiental a los poderes públicos, así como la participación presencial de la ciudadanía en comisiones parlamentarias y comparecencias. Se trataba así de "empoderar" a la opinión pública para que ésta exigiera cambios radicales en las políticas vigentes.

En 1990 el Partido Verde dejó de tener representación en el Parlamento de Alemania. Sin embargo, durante las dos últimas décadas, esta formación política, así como otras análogas en otros países, han

llegado a gobernar en coalición –preferentemente, aunque no siempre, con partidos socialdemócratas–.

En los años más recientes, los partidos verdes han registrado muy buenos resultados electorales en varios países europeos, a nivel regional y nacional. Incluso han llegado a convertirse en segunda fuerza –en el *lander* de Baviera, en Islandia... – o en un partido crucial para garantizar la gobernabilidad, en Luxemburgo, en Bélgica...; en el caso de Suecia, contribuyendo a evitar el acceso de la extrema derecha al Gobierno.

Los partidos verdes europeos mantienen un perfil marcadamente europeísta, defendiendo una democracia más participativa, así como los derechos humanos y la convivencia

en sociedades abiertas y diversas. Han incorporado gradualmente la componente social, apostando por una “transición justa”, en la que se compense la reducción de empleo en actividades contaminantes con la creación de nuevos puestos de trabajo en actividades sostenibles. Todo ello les convierte en una opción atractiva, en particular para el electorado más joven, cada vez más consciente de los desafíos ecológicos y de la ausencia de equidad, tanto a nivel global como a nivel local.

El caso de España: la resistencia ante el enfoque ecologista

España constituye una anomalía, en cuanto a la muy escasa presencia de los partidos verdes en la escena política. Varios factores propios del movimiento ecologista español explican en parte esta circunstancia: durante mucho tiempo se ha evidenciado una dificultad notable para pasar del activismo a las instituciones, dando lugar a una gran fragmentación de los partidos verdes, que de esta forma no alcanzaban los umbrales mínimos para obtener representación parlamentaria.

Pero, a mi juicio, ha pesado también una idiosincrasia “antiecología” muy generalizada, en un país que pasó con gran velocidad de la dictadura y el subdesarrollo a la democracia y el bienestar material, con escasa capacidad de digerir la importancia de estos cambios, y que se ha comportado, en gran medida, como un “país de nuevos ricos”.

Este panorama va cambiando, y desde 2011 existe un partido verde, Equo, que ha conseguido llegar a las instituciones gracias a su integración en las listas de Podemos —a pesar de que la ecología no tenía un peso relevante en el ideario fundacional de este partido—.



Asimismo, cabe destacar la apuesta por la ecología en el proyecto de socialdemocracia renovada que lidera Pedro Sánchez: en las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE (2017), se incorporó la sostenibilidad ambiental como nueva seña de identidad del proyecto, como garante de un progreso seguro, justo y duradero que permita avances importantes en los valores fundacionales: igualdad, libertad y solidaridad, a nivel nacional, europeo y global.

En España, la socialdemocracia renovada que lidera Pedro Sánchez apuesta por la ecología, tal como puede verse en las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE (2017), donde se incorporó la sostenibilidad ambiental como nueva seña de identidad del proyecto, como garante de un progreso seguro, justo y duradero que permita avances importantes en los valores fundacionales: igualdad, libertad y solidaridad, a nivel nacional, europeo y global.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado ya pasos en la concreción de estos principios, comenzando por la creación de un ministerio para la transición ecológica, que añade la energía a las competencias previas del ministerio de medio ambiente, siguiendo el ejemplo de otros gobiernos europeos. En sus primeros siete meses, este Gobierno ha

tomado decisiones de mucho calado, como la eliminación del denominado “impuesto al sol”, en el contexto de una apuesta renovada por las energías renovables; ha aprobado ya la norma para desarrollar programas específicos de “transición justa” en las comarcas afectadas por el cierre de minas y centrales de carbón. El Gobierno está, además, próximo a aprobar el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, así como el Plan Integral de Energía y Clima.

Por otro lado, el Gobierno está incorporando en todas las políticas la Agenda 2030, aprobada en 2015 por todos los países en la Asamblea de Naciones Unidas. Esta Agenda exige un enfoque coherente, de medio y largo plazo, integral, reconociendo la interdependencia entre los procesos sociales, económicos y ambientales. **TEMAS**